

FRENTE AMPLIO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: RECUPERANDO EL SENTIDO COMÚN

I. DIAGNÓSTICO

Durante el último tiempo, la Educación se ha transformado en un lugar común. Se utiliza como la solución para revertir gran parte de las consecuencias negativas que ha generado nuestra matriz cultural histórica de desigualdades.

De esta forma, se plantea que hay que generar más educación para: reducir la pobreza, generar capital humano avanzado – motor de mayor crecimiento económico y competitividad-, acabar con la inequitativa distribución del ingreso, entre otras.

Sin embargo, detrás de estas demandas se posicionó monopólicamente la idea de que el sistema educativo tiene una meta o producto final “el cartón”, a través del cual cada persona podrá optar a status social y consumo futuro en la medida que podrá recibir ingresos cuatro veces más altos que los jóvenes que sólo alcanzaron a terminar la educación secundaria.

Cuando se recurre a la educación y se le asigna propiedades curativas para sanar nuestros males sociales, se la define de una manera parcial y estrecha. En esencia, se la utiliza como un insumo orientado a los requerimientos del mercado, destacando los beneficios individuales y caricaturizando sus impactos sociales. El sistema educativo de Chile, bajo todas sus modalidades, no tiene vida propia.

No es de extrañar que falte consistencia en las políticas que se proponen y se aplican para mejorar el sistema educacional. Todas ellas apuntan a la obtención del “cartón”, perdiendo relevancia el tipo de educación que se entrega y los mecanismos que se utilizan para mejorar los niveles de acceso, algo de equidad y supuesta calidad.

La Educación es un derecho; es presente y futuro, es capital humano para una estrategia de desarrollo que vele por el bien común y tenga como premisa la igualdad de oportunidades; es energía para formar verdaderos ciudadanos democráticos, participativos e informados.

Actualmente, indicadores tanto cuantitativos como cualitativos nos revelan que existe una seria amenaza para que el concepto amplio de Educación pueda desplegarse y llegar a todos los sectores de la sociedad. Existe un sinnúmero de problemas e inconsistencias que a continuación se proceden a detallar:

j) El contexto en que opera el sistema educacional chileno es bastante adverso.

Chile detenta una de las economías con peor distribución del ingreso en el mundo, en donde el 10% más rico de la población capta ingresos 35 veces más altos que el 10% más pobre. Bajo este escenario -que no presenta sustanciales variaciones en las últimas décadas- se articuló un sistema de educación formal segmentado y sujeto a subvenciones estatales de escaso valor en relación con los requerimientos que necesita un estudiante promedio.

Desde que el sistema educacional se transformó en un supermercado y la educación, por ende, en una mercancía altamente valorada, la capacidad de pago pasó a ser la variable clave para determinar el tipo de educación que reciben los niños, niñas y jóvenes chilenos. Para ser más precisos, en la actualidad existe una matrícula que sobrepasa los 3,6 millones de estudiantes, de los cuales un 54% se encuentra inserto en las escuelas municipalizadas y en las corporaciones, casi un 38% en los colegios particulares subvencionados y algo más del 8% en los colegios particulares pagados.

Las diferencias son abismantes y en sintonía con las características duales que caracterizan a esta sociedad. Según los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad Educacional (SIMCE), aplicada en noviembre del 2003 a un total de 243.115 alumnos de segundo medio en 2.117 colegios de todo el país, el 83% de los estudiantes

Autor:
Marco Kremerman
Coordinador Programa Realidad Social
Fundación Terram

pertencientes a las escuelas municipales viven en un hogar en donde el ingreso mensual promedio es menor o igual a \$180.000. Por otra parte, dos de cada tres alumnos que se educan en colegios particulares pagados, cuentan con un ingreso familiar promedio de \$1.526.000.

Lo angustioso de estas estadísticas es que, en promedio, el Estado chileno invierte \$30.000 mensuales por alumno en el sistema subvencionado. En cambio, en los colegios particulares pagados los padres gastan casi cinco veces más en sus hijos. De hecho, si consideramos el ranking internacional que se desprende año a año del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, Chile se encuentra entre los países que menos recursos públicos destina a educación como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando el 3,9% del PIB y ubicándose sólo en el lugar 84 entre 137 países.

Salvo contadas excepciones, el menú de establecimientos educacionales está fraccionado en dos partes. En una de ellas, encontramos colegios como el Grange School, Tabancura, Andree, Santiago Colledge y La Giroutte, que presentan una colegiatura mensual promedio de \$235.000, además de una media de 30 alumnos por curso, con profesores muy bien remunerados, que disponen de horas libres pagadas y una excelente infraestructura para preparar sus clases y entregarlas a sus alumnos. A su vez, los alumnos pertenecen a hogares en los cuales se cultiva la lectura, en donde prácticamente el 100% posee un computador y tiene acceso a Internet y que permanentemente pueden asistir al cine, exposiciones y al teatro.

La otra cara de la moneda corresponde a la mayoría de los colegios municipalizados en donde se alcanza una media de 43 alumnos por curso, con profesores que logran una remuneración promedio de \$300.000 y que apenas cuentan con una o dos horas pagadas a la semana para preparar sus clases. El alumnado habita preferentemente hogares de mucho esfuerzo, en que los padres presentan una baja escolaridad y en que el acceso a los libros es privativo.

Si consideramos al 40% más pobre de la población (los dos primeros quintiles), - los usuarios mayoritarios de educación pública- se puede observar que la escolaridad del jefe de hogar apenas llega a los 8 años, versus los 15 años que se aprecia en los jefes de hogar de las familias que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados. Además, sólo tres de cada diez niños de este grupo tuvieron educación preescolar, proceso clave para el posterior aprendizaje y más aún cuando se presentan déficit socioeconómicos tan grandes como en Chile. Finalmente, en el 41,4% de estos hogares no existe ningún sólo libro y uno de cada diez tiene un computador en su casa.

ii) ¿Mayor acceso es mayor progreso?

En relación con el acceso a las distintas modalidades del sistema de educación formal, los esfuerzos no han sido menores en los últimos años, alcanzando metas como: a) 12 años de educación obligatoria, b) la cobertura preescolar subió desde un 20,9% en 1990 a 35,1% en 2003, c) la cobertura en enseñanza básica llega casi a un 100% d) la cobertura en enseñanza media que se elevó desde un 80,3% a un 92,6% en los últimos 14 años y v) la cobertura en educación superior más que se duplicó, pasando del exiguo 16% a un 37,5%.

Para atacar las desigualdades socioeconómicas de origen, ahora se propone universalizar la educación preescolar, clave para el desarrollo cognitivo y los procesos de aprendizaje de los futuros estudiantes. Actualmente, sólo uno de cada tres niños y niñas pertenecientes al 40% más pobre de la población puede acceder a este "beneficio". Más aún, para los niños de hasta tres años sólo existe una cobertura universal del 20%.

En la educación básica y media, una vez resueltos los problemas de cobertura, se aboga por lograr calidad. Se busca reducir la brecha por nivel socioeconómico y dependencia según establecimiento, en los resultados de la prueba Simce, así como preparar a los alumnos para que obtengan buenos puntajes en la Prueba Selección Universitaria que les permita acceder a la educación superior.

La diferencia en el puntaje promedio en el último SIMCE para el cual se cuenta con resultados entre un alumno que pertenece a un colegio con dependencia municipal y otro a uno particular pagado llega a ser de 60 y 87 puntos en Lengua Castellana y Matemáticas, respectivamente.

De acuerdo a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) rendida a finales de 2003, entre los 200 establecimientos con mejores rendimientos se observaron sólo cinco colegios municipales, todos pertenecientes a las comunas de Providencia y Santiago, como es el caso del Instituto Nacional, el Carmela Carvajal o el Liceo N°1, los cuales tienen exigentes mecanismos de selección de sus alumnos.

En el 93,2% de los liceos municipales se obtuvo un puntaje promedio inferior a 450 puntos, requerimiento mínimo para ingresar a las universidades tradicionales, lugares en donde se puede acceder a los créditos y becas del Estado. El 64% de los puntajes nacionales de la PSU 2004 provienen de colegios particulares pagados.

La brecha en los puntajes promedio de la PSU 2004 entre colegios particulares pagados y municipalizados llega a 113

puntos en Matemáticas, 108 en Ciencias, 106 en Lenguaje y 97 en Historia y Ciencias Sociales. Aún más, un alumno que vive en un hogar que cuenta con menos de \$278 mil, obtiene un puntaje promedio en Matemáticas 155 puntos más bajo que aquel que es miembro de un hogar en donde el ingreso mensual supera los \$2,5 millones.

Al final del proceso, sólo algo más del 5% de la matrícula total en los distintos establecimientos que componen el sistema de educación superior en Chile corresponde a estudiantes que pertenecen al 20% más pobre de los hogares chilenos. Por si fuera poco, sólo el 27,5% de los estudiantes que inician un plan de estudio logra terminarlo. La urgencia económica y la excesiva extensión de las carreras parecen ser las causas principales de tales niveles de deserción.

iii) Mala Calidad

Las distintas evaluaciones internacionales coinciden en destacar la mala calidad de la educación chilena. Los resultados de la prueba PISA o de la prueba TIMSS, siempre nos ubican en el fondo de la tabla. Adicionalmente, estamos muy mal evaluados en educación cívica; el 80% de los chilenos no tiene el nivel de lectura mínimo para funcionar en el mundo de hoy y tres de cada cinco comprende con dificultad la fórmula para preparar una mamadera.

Un denominador común ha sido asignar la responsabilidad de los magros resultados educacionales a los profesores. Se apuntan sus deficiencias en especialización, la ausencia de procesos de acreditación más rigurosos para convertirse en maestro, su negativa a someterse a la Evaluación Docente, su tendencia a poner notas más altas de las que merecen los alumnos, la histórica inamovilidad de sus cargos en las escuelas públicas y la supuesta incapacidad para cubrir todo el currículo y guiarse por los textos de estudio.

Existe una realidad que no se puede desconocer: los profesores chilenos, en promedio, cuentan con menor especialización en las áreas en que imparten clases en relación con otros países, pero al mismo tiempo tienen que enfrentarse a una matriz de desigualdad de origen que no se ve en otras sociedades, además de una pésima infraestructura educacional.

El punto central es que todavía no se abre un debate técnicamente serio que contextualice de manera adecuada la barrera socioeconómica que restringe notoriamente la labor que pueden hacer los profesores -especialmente aquellos que se desempeñan en los establecimientos municipalizados- para entregar educación de calidad a sus alumnos. Se presenta un gran desafío para el único país en la historia moderna que pretende lograr calidad educativa en un mar de desigualdad.

Sin embargo, es pertinente considerar que el concepto de calidad no sólo se reduce a niveles de excelencia en Ciencias, Matemáticas o Lenguaje o a buenos puntajes en la PSU. También es un indicador de calidad el tipo de personas que se forman en las distintas modalidades del sistema educacional.

Existe un progresivo descuido en la transmisión de ciertos valores asociados con el bien común en los sistemas formales. La captura por la subvención estatal, y la carrera por elevar los puntajes de los alumnos en los sistemas de evaluación, muchas veces restringen la posibilidad de llevar a las aulas planes de estudio que potencien íntegramente al alumno.

El estudiante-cliente, opera bajo un sistema, en donde la mayoría de las políticas confluyen a la obtención del “cartón”, vinculadas a las leyes de oferta y demanda del mercado. La educación pasa a ser una inversión individual, cuyo fundamento último es la obtención de ingresos futuros. Esta lógica minimiza el aporte sustancial que la educación debe hacer en la promoción de ciudadanos democráticos, estrategias de desarrollo sustentables para el país y comportamientos prosociales en general.

iv) Debilitamiento y ambigüedad del Rol del Estado en la Educación Chilena

Como ya se definió anteriormente, la Educación es un derecho y el acceso y la calidad no pueden depender del poder adquisitivo de las personas. El rol del Estado justamente es asegurar que no ocurra este fenómeno y, al mismo tiempo, incentivar una virtuosa relación entre los sistemas educativos y las necesidades del país.

El nivel de participación del Estado en la asignación de servicios con impacto social -como es el caso de la educación- no es un a priori, sino que depende del contexto cultural e institucional que se observe en cada sociedad.

Dado que Chile es un país extremadamente desigual, tanto en la distribución del poder, las oportunidades y en los ingresos, la ruta seguida por el Estado resulta tan o más importante que el crecimiento que experimenta la matrícula.

En la educación chilena ha ocurrido algo muy semejante a lo que se observa en la economía chilena. Se ha privilegiado el proceso de crecimiento en sí mismo y se ha puesto escasa atención a los medios que se utilizan para conseguir tales niveles de crecimiento.

El Estado chileno, optó (con ausencia profunda de un debate en la sociedad civil) por una ruta principalmente privada en su sistema formal de educación. Las escuelas municipalizadas dieron paso a las escuelas particulares pagadas; las universidades privadas predominan sobre las universidades estatales y las carreras de carácter técnico fueron entregadas al mercado.

Una de las consecuencias más nítidas de este proceso se aprecia en la educación superior, en donde de cada diez pesos gastados, sólo dos provienen de fuentes públicas; el resto corre por cuenta de las familias chilenas. Se debe recordar que en los países desarrollados se observa un escenario absolutamente opuesto, ya que el 80% del gasto en educación superior está vinculado al Estado.

Cabe destacar que no se trata de la añeja discusión Estado v/s Mercado, sino que, por el contrario, se intenta demostrar que considerando el particular contexto cultural chileno, el abandono de “lo público” en la asignación de un servicio de carácter social como la educación, genera desastrosos resultados, ya que reproduce las desigualdades de origen. Hoy día, la educación no es el camino hacia una sociedad más igualitaria, sino una fuente más para replicar las profundas desigualdades que existen.

Por lo mismo, gran parte de las políticas educacionales elaboradas durante los últimos años, sólo cumplen el rol de guiar el mercado y, cuando hacen uso del concepto de educación en su más amplio sentido, carecen de consistencia por cuanto se encuentran con barreras estructurales para generar equidad, calidad y bien común.

Un caso paradigmático corresponde a la recién aprobada ley de financiamiento a la educación superior, a través de la cual se posibilita que estudiantes de planteles privados puedan optar a créditos bancarios con garantía estatal para financiar sus estudios. Esta ley, que nace como una respuesta urgente a un proceso de crecimiento vertiginoso en la demanda por educación superior, no se encuentra circunscrita en ninguna idea acerca de la educación que se quiere para el país, ni en el compromiso público que se necesita.

Luego, se intentó colocar a los estudiantes de universidades tradicionales como los obstaculizadores de la equidad, al no permitir que sus compañeros pudieran acceder a estos beneficios. De esta forma se impidió un debate de fondo, una reflexión estructural a la que apuntaban el grueso de los disconformes.

II. PROPUESTAS

Para revertir este complicado escenario, es necesario dar un giro profundo tanto a la orientación de las políticas educacionales aplicadas hasta este momento, como a la forma de pensar de los distintos actores. Por ello se hace pertinente:

1) Desarrollar un **debate profundo sobre el tipo de educación que queremos**, en donde participen académicos, estudiantes secundarios, estudiantes de instituciones privadas, padres y apoderados, educadores populares, intelectuales, artistas, representantes del mundo social y de la cultura. La sociedad debe decidir toda -y no sólo una pequeña porción de ella- para dónde va la Educación

en Chile, quiénes son parte de sus escuelas y universidades y de dónde salen los recursos.

Es fundamental el empoderamiento de toda la comunidad educativa. Se requieren instancias de participación, actores informados y grupos organizados que respondan a un debate estructural y de largo plazo y no sólo a problemas coyunturales.

2) **Cualquier política educativa** vinculada con el acceso, financiamiento, equidad o calidad, **no debe ser una iniciativa aislada**, sino que debe estar en sintonía con las directrices generales que se encuentran detrás del tipo de educación que queremos. La Evaluación Docente, el financiamiento para la educación superior, el número de alumnos por curso, el acceso a la educación preescolar y los currículum implementados en las salas de clases, no pueden ser respuestas parciales ante deficiencias en la calidad o aumentos vertiginosos en la demanda por educación, sino que **deben responder a un criterio común**.

3) Se necesita **mayor aporte estatal a la educación chilena**. Una subvención de \$30 mil mensuales por alumno en enseñanza básica y media, una inversión de 0,5% del Producto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo y un sistema de becas y créditos solidarios que con suerte cubrirá sólo a aquellos estudiantes pertenecientes al 40% más pobre de la población, vale decir, con ingresos familiares menores a los \$220 mil, son parámetros que confabulan en contra de la equidad y la calidad.

Chile debe dar un salto en su estrategia de desarrollo hacia una segunda fase con mayor valor agregado, para insertarse en un mejor pie y más humanamente en el proceso de globalización. Por ello, resulta pertinente que estos recursos provengan de los beneficios generados por la actual estrategia de desarrollo basada en la exportación de materias primas. La aplicación de royalties o un traspaso de parte del 10% de las ventas de Codelco entregados a las Fuerzas Armadas, cumplen con este requisito.

4) Es necesario **reposicionar lo público** no sólo desde un punto de vista social, sino que individualmente. El reconocimiento de la educación como un mero insumo para la obtención de ingresos futuros, es una práctica que no sólo se ha transformado en una idea dominante en el debate político, sino que opera en la cotidianidad de gran parte de las personas.

5) Un **Frente Amplio por el Derecho a la Educación** no sobrepone demandas gremiales o sectoriales por sobre aquellas de interés común. Aún más, entiende que los problemas en la educación preescolar son los problemas de la educación básica o de la educación superior. La obtención del “cartón” y su posterior premio de mercado ya no debe ser el común denominador que cobije a las distintas modalidades de la educación chilena.